

“¡NO ERA PARA ELLOS EL CAMBIO!”. ESTADO, HEGEMONÍA Y DOMINACIÓN PATRIMONIALISTA EN TIEMPOS DEL MAS

*Börries Nehe**

INTRODUCCIÓN

Históricamente, el norte Amazónico de Bolivia, que abarca el departamento de Pando, la provincia Vaca Díez del Beni y el municipio Ixiamas del norte de La Paz, ha ocupado una posición periférica en el imaginario sobre la nación y su territorio, y en los discursos y la praxis política del Estado central. Esta situación cambió repentinamente en agosto del año 2008, cuando Evo Morales declaró a Pando como el “primer departamento completamente saneado” del país,¹ convirtiéndolo así en la punta de lanza de la “Revolución Agraria” del gobierno del Movimiento al

* Börries Nehe es doctor y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Humboldt-Universität de Berlín. Desde el año 2010 es miembro del Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”. Sus intereses académicos se centran en los movimientos sociales, indígenas y campesinos, en la problemática del Estado, de la autonomía y de los comunes, así como en las cuestiones del espacio y de los procesos de urbanización. Es colaborador de medios independientes en México y Alemania, y editor de *Calibán. Revista de Antropofagia Cultural* (boerries@gmail.com).

¹ Es decir, donde ha terminado el proceso jurídico-técnico a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mediante el cual se identifican los derechos sobre la propiedad agraria, se definen los límites prediales y se verifica si las propiedades cumplen con la función económica-social (FES).

Socialismo (MAS). En realidad, la lucha por la tierra en la región había iniciado ocho años antes, cuando los movimientos indígenas y campesinos de la región marcharon a La Paz en demanda de títulos de tierra. Hasta entonces, prácticamente no existían títulos de propiedad en la región: los patrones latifundistas, aquí llamados barraqueros, se habían apropiado *de facto* (más no *de jure*) de la selva amazónica, donde miles de trabajadores y trabajadoras extraían la goma de los árboles de la *Hevea brasiliensis* en condiciones de semiesclavitud;² desde que se derrumbaron los precios internacionales de la goma en los ochenta, trabajan en la recolección de las nueces brasileñas (llamadas castañas) y la extracción de maderas preciosas, las dos actividades más importantes en la región.

En el transcurso del año 2000, las organizaciones campesinas e indígenas habían logrado que se iniciara el proceso de saneamiento en el norte amazónico, y conquistaron el derecho a 500 hectáreas de tierra por cada familia campesina amazónica. Esto garantizaría no sólo un aprovechamiento sustentable del bosque, ya que la gran superficie permite a las comunidades campesinas vivir de la recolección de las nueces y de algunas actividades agroforestales no invasivas, sino también el debilitamiento de la base económica de la clase dominante que era un objetivo central de los campesinos. Sin el rompimiento del control territorial de los terratenientes, tampoco habría cómo romper el aplastante poder político y social que ejercían.

La configuración de esta dominación se caracterizó como patrimonialista, lo cual implica que no se ha dado un proceso de

² La explotación de la selva y de los trabajadores se organizaba en las barracas, que pueden definirse como “espacios de haciendas gomero-castañeras de funcionamiento cerrado, en los cuales se explotan recursos forestales maderables y no maderables, donde el administrador y el dueño disponían de la vida de sus trabajadores, administraban justicia, definían lugares de asentamientos de las familias y horarios de trabajo, sin que el Estado boliviano tenga injerencia”. DHV, *Sistemas de recolección de castaña en la Amazonía Boliviana*, vol. C, Estudios Agro-Ecológicos, Forestales y Socio-Económicos en la Región de la Castaña de la Amazonía Boliviana, La Paz, 1993.

separación entre los poderes económicos, políticos y sociales.³ Por eso, no existe un orden estatal moderno, sino una densa red de latifundistas, empresarios y sus representantes directos, de favores personales y corruptelas, de parentescos y chantajes, que permea las instituciones del Estado, sólo formalmente presentes, así como también atraviesa a las instituciones de la sociedad (que por eso no es “civil”). La Amazonía se caracteriza por tener el ejercicio del poder mediante una metáfora denominada “síndrome de la barraca”, que hace referencia a que no existe ciudadanía ni derechos para los subalternos, sino que a éstos se les mira y trata como propiedad del patrón. Al mismo tiempo, el control sobre los aparatos estatales por parte de la clase terrateniente le garantiza una total impunidad y el acceso al presupuesto del estado local, cuyo reparto clientelar desempeña un papel central para la perpetuación del orden reinante.⁴ Romper esa configuración constituye el meollo de la lucha campesina cuyo horizonte, según la investigadora Margoth Céspedes, es la “autodeterminación” de las comunidades campesinas: “un proceso sistemático que empieza por la apropiación, control y valoración de lo propio (tierra y recursos naturales), [y] continúa con el fortalecimiento y empoderamiento político de la organización como mecanismo de defensa y de gobierno propio”.⁵

³ Luis Tapia, “El Estado en condiciones de abigarramiento”, en Álvaro García *et al.*, *El Estado. Campo de lucha*, La Paz, Muela del Diablo, 2010, pp. 97-128.

⁴ Cobija, la capital de Pando, por ejemplo, es una ciudad que depende completamente de la distribución clientelar del presupuesto departamental: en 2008, la cantidad de trabajadores de la prefectura de Pando era mayor a la de la prefectura de La Paz, en esta ciudad de menos de 40 000 habitantes, la planilla de la prefectura comprendía 4 000 empleados directos y, “multiplicando esta suma de empleos directos a los indirectos, resulta que prácticamente toda la ciudad depende de ‘el cacique’”, es decir, del prefecto Leopoldo Fernández. Rafael Bautista S., *La masacre no será transmitida. El papel de los medios en la masacre de Pando*, La Paz, Ministerio de la Presidencia/Editora Presencia, 2010, p. 73.

⁵ Margoth Céspedes, *Acceso y distribución interna de la tierra en comunidades campesinas de Pando*, Santa Cruz de la Sierra, CEJIS, 2006, p. 17.

Como es obvio, la clase terrateniente amazónica no iba a aceptar que ocurriera ese proceso de reversión de sus propiedades *de facto*. En los años anteriores a la llegada del MAS al poder en el Estado central, el norte amazónico fue escenario de violencia, intimidación y chantaje. Esto junto con el control sobre el estado local permitieron al grupo dominante paralizar el saneamiento durante varios años. Al mismo tiempo, gracias a la presencia de sus representantes en el Estado central, supo traducir sus intereses en leyes y disposiciones estatales, una de las más importantes es el Decreto Supremo 27 572, aprobado en 2004 y conocido por los campesinos como “Decreto Barraquero”, que garantizaba la dotación de 15 000 hectáreas a los grandes propietarios. Desde el año 2006, esa querrela regional por el acceso a los recursos del bosque se entremezcló, por un lado, con la confrontación entre el gobierno de Evo Morales y los sectores indígena-populares afines y, por el otro, los grupos dominantes de las “tierras bajas” y los movimientos por la “autonomía departamental”. Estos últimos se constituyeron como la Media Luna, que comprendía los departamentos Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Desde la trinchera de las administraciones departamentales y de los “Comités Cívicos” reivindicaban su derecho a la autonomía, enfrentándose al Estado central y a todas y todos aquellos que representaban el peligro de un cambio del *statu quo*.⁶ La lucha de clases atravesaba geográfica e institucionalmente el Estado boliviano.

Exactamente un mes después de la declaración de Pando como “departamento completamente saneado”, los grupos autonomistas asaltaron la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la capital departamental, Cobija, y quemaron la documentación sobre el saneamiento que encontraron allí. Pre-

⁶ Marxa Chávez y Börries Nehe, “Dominación y rebelión en el oriente boliviano. La construcción de Oriente y el Cerco a Santa Cruz”, en Colectivo Katãr Uta [ed.], *¿Ahora es cuando? Bolivia: cambios y contradicciones*, México, Pez en el árbol, 2011, pp. 37-100.

ocupados por sus títulos de tierra, las comunidades campesinas de la región se movilizaron para marchar hacia Cobija. En la madrugada del 11 de septiembre de 2008, funcionarios de la prefectura e integrantes del Comité Cívico emboscaron a las y los campesinos en el poblado de Porvenir, a pocos kilómetros de la capital. Asesinaron a más de veinte personas.⁷ Al día siguiente, el gobierno nacional declaró estado de sitio en Pando, detuvo al autor intelectual de la matanza, el prefecto Leopoldo Fernández, e instaló un prefecto militar interino. De esta manera, afirmó entonces el vicepresidente Álvaro García Linera, el gobierno logró “retomar el control de Pando” y “en 24 horas se restableció la tranquilidad, algunos miembros de esos grupos de criminales y asesinos, fueron encerrados y la mayor parte escapó a otras regiones”.⁸

Los acontecimientos en Pando contribuyeron, según la propia evaluación de García Linera, a que el gobierno retomara la batuta y lograra que la oposición se sentara a negociar la ley de convocatoria al referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), a lo cual se había negado hasta entonces. En las negociaciones que comenzaron pocos días después de la masacre y que no contaron con ningún mandato democrático, la Media Luna y la oposición parlamentaria lograron cambiar 140 de los 400 artículos de la NCPE. Entre los cambios más importantes de la versión aprobada por la Asamblea Constituyente se encuentra

⁷ Una discusión detallada de los acontecimientos, de los discursos y de las prácticas que llevaron a la masacre, y de las interpretaciones y del uso político que hoy por hoy se hace de este suceso, se encuentra en Börries Nehe, “Nuestro Porvenir. Espacio y narración en la masacre de campesinos en Pando, Bolivia”, en *Pensando Bolivia desde México. Estado, Movimientos, Territorios y Representaciones*, México, Posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM/Posgrado en Ciencias del Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, 2016.

⁸ Álvaro García Linera, “Cómo se derrotó al golpismo Cívico-Prefectural”, en *Discursos & ponencias del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia*, año 2, núm. 3, 2008, p. 16.

la ampliación de las capacidades autonómicas de los departamentos y la introducción del principio de no retroactividad del límite máximo a la propiedad de tierra, equivalente a una legalización *ex post facto* de los latifundios existentes.⁹

Después de la conclusión del saneamiento y la masacre de campesinos, el tercer momento en que el norte amazónico recibió una atención, algo inusual, fue a mediados del año siguiente, con la NCPE ya en vigencia. El gobierno anunció que realizaría un programa de “Nuevos Asentamientos Humanos” (NAH) en las regiones fronterizas de Pando para de esta manera “sentar soberanía”. El proyecto preveía el envío de un número, nunca del todo aclarado, de colonizadores provenientes del Trópico de Cochabamba (el gobierno hablaba de 3 000 o 4 000 familias) para “transformar el país desde la frontera, para que nunca más sea abandonada, desprotegida y para que esta zona de límite se transforme en un polo de desarrollo”, como explicó el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana en la inauguración del primer asentamiento en agosto de 2009.¹⁰ De esta forma, el gobierno pretendía rescatar “un vasto territorio sumido en el miedo y el silencio de servidumbres propias del siglo XIX, para consolidar lo nacional-boliviano, contra la anti-patria de los separatistas organizados y financiados por la CIA”.¹¹ Los representantes de esa “anti-patria” no estaban exactamente deleitados con el programa, pues sospechaban que se trataba nada más que de un escamoteo con el fin de ganar votos para el MAS en las elecciones nacionales y departamentales que se avvicinaban en diciembre de 2009 y

⁹ Manlio Flavio Barbosa y Gabriela Delgadillo, “El papel del Estado en la transformación de lo legítimo a lo legal”, en *¿Ahora es cuando?...*, pp. 101-138.

¹⁰ “Se inicia polo de desarrollo productivo soberano en Pando”, en *Periódico Cambio*, 8 de noviembre, 2009. En <http://observatorio-ddhh.blogspot.mx/2009/08/se-inicia-el-polo-de-desarrollo.html>.

¹¹ Citado en Fabiola Escárzaga, “Las comunidades interculturales y la política agraria del gobierno de Evo Morales”, en Gaya Makaran [coord.], *Perfil de Bolivia (1940-2009)*, México, CIALC-UNAM, 2011, p. 151.

abril de 2010, respectivamente.¹² Efectivamente, en las elecciones regionales y departamentales de 2010 el candidato del MAS a gobernador de Pando obtuvo 49.7%, contra 48.4% del candidato opositor, una diferencia de apenas 448 votos. Así, Pando fue el primer departamento que se arrebató, primero por la fuerza, luego democráticamente, a la derecha autonomista.

EL “PUEBLO”, LOS DISCURSOS Y LA NACIÓN (EVERYTHING WRONG WITH POSTMARXISM)

Desde entonces, diferentes observadores han argumentado que el “empate catastrófico” entre las fuerzas políticas confrontadas ya tenía que haberse resuelto. Según esta visión, la oposición regresó al seno del Estado, donde los conflictos se resuelven de manera ordenada; en el ámbito nacional se busca, hasta ahora sin éxito, articular un partido que pueda enfrentar al MAS en las elecciones; en lo regional, los gobiernos departamentales y municipales de la vieja y nueva derecha parecen tan anclados en la institucionalidad del Estado plurinacional como sus pares en manos del oficialismo desde que adecuaron sus “estatutos autonómicos” a la NCPE. Desde los Comités Cívicos hasta las asociaciones económicas de las élites agroindustriales de oriente han optado por colaborar con el gobierno de Evo Morales, y viceversa. Muchos(as) observadores concuerdan, desde luego, en que se ha reconstituido tanto la unidad del “pueblo boliviano”, como la de su Estado.

¹² No se puede descartar del todo: Pando tenía un padrón electoral de apenas 30 000 personas que creció 32% entre enero y diciembre de 2009; el MAS, por su parte, mejoró su resultado de 20.5% en 2005 a 44.5% en 2009 (aun así, la mayoría de los votos en las elecciones nacionales fue a la derecha, que era suficientemente cínica como para haber presentado a Leopoldo Fernández, entonces encarcelado en La Paz, como candidato a vicepresidente).

Un ejemplo de esa lectura es la que hace el actual secretario de Política y Área de Estrategia y Campaña del partido político español “Podemos”, Íñigo Errejón, en su tesis doctoral *La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo*.¹³ Desde una perspectiva fundada principalmente en el trabajo de Ernesto Laclau, Errejón sostiene que “el MAS y Evo Morales han funcionado como condensadores, significantes vacíos, de una reconstrucción del ‘Pueblo boliviano’, afirmándose como su representante legítimo ante un “‘afuera constitutivo’ minoritario, que en el caso boliviano es una ‘oligarquía antinacional’ y potencialmente separatista”.¹⁴ En este sentido, el MAS habría logrado convertirse en actor hegemónico, ya que determina la agenda y los términos de la discusión política nacional, y el resto de los actores adquiere su sentido con relación a ese partido. Después de años de confrontación, el partido gobernante habría alcanzado una “victoria relativa” que “asegura la conducción estatal por el oficialismo, y la preeminencia de sus marcos discursivos en la discusión política boliviana”,¹⁵ gracias sobre todo al hecho de haber integrado la demanda autonomista de descentralización departamental al Estado plurinacional y desarrollista: “Así ha fragmentado al bloque opositor, seduciendo a buena parte de él a través de la inclusión subordinada de sus propuestas en la reforma general del Estado”.¹⁶

Según mi juicio, esta lectura “posmarxista” parte de una fetichización problemática del lenguaje y una limitación injustificable del análisis en la escala “nacional”, que es presupuesta de manera relativamente irreflexiva como el lugar principal de la

¹³ Íñigo Errejón Galván, *La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo*, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2011, p. 425. En <http://eprints.ucm.es/14574/1/T33089.pdf>.

¹⁴ *Ibid.*, p. 424.

¹⁵ *Ibid.*, p. 427.

¹⁶ *Ibid.*, p. 573.

lucha por la hegemonía y de la realización de lo político. Considero además que ese enfoque del análisis del discurso carece de una teorización convincente de la relación entre la producción de sentidos y la construcción de Estado. A esa lectura, que sostiene que el MAS estaría conduciendo el Estado (es decir, que el gobierno habría logrado realizar un Estado “plurinacional” y/o “desarrollista” hegemónico), quiero oponer una visión que entiende la estructuración estatal y la (des)articulación política en términos graduales, poniendo énfasis en la diferenciación entre múltiples escalas geográficas. Especialmente en Bolivia, donde la existencia misma del “conjunto nacional” siempre está en vilo y la unidad del Estado se cuestiona permanentemente,¹⁷ es necesario problematizar los niveles en que se produce, o no, hegemonía y Estado, pensando éste como una relación social o, más exactamente, como la condensación material de una relación de fuerzas.¹⁸

El teórico boliviano René Zavaleta ha puesto énfasis en la precariedad que esa relación de fuerzas ha revestido históricamente en Bolivia debido a que la sociedad boliviana constituye lo que él denomina una “formación social abigarrada” en la cual existe “una diversidad de sociedades, es decir, un conjunto de relaciones sociales, modos de producción, concepciones del mundo, lenguas y estructuras de autoridad o tiempos históricos, cuyo rasgo central es la condición de una sobreposición desarticulada”.¹⁹ Esa no-unificación de la sociedad y de sus grupos dominantes habría

¹⁷ La lucha contra el “centralismo” de la Media Luna es sólo un ejemplo de ello, de ahí que el historiador José Luis Roca puede afirmar que “la historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases. Es más bien la historia de sus luchas regionales”. José Roca, *Fisonomía del regionalismo boliviano: la otra cara de la historia*, 3ª ed., Santa Cruz de la Sierra, *El País*, 2007. Por cierto, lo que Roca no ve es que las luchas regionales no son más que una expresión específica, histórica y geográficamente concreta de la lucha de clases.

¹⁸ Nicos Poulantzas, *Estado, poder y socialismo*, México, Siglo XXI, 1979, p. 154.

¹⁹ René Zavaleta Mercado, *La autodeterminación de las masas*, edición de Luis Tapia Mealla, Bogotá/Buenos Aires, Siglo del Hombre/Clacso, 2009, p. 24.

dado lugar a un “Estado aparente”, “donde en realidad se llama Estado, por nominalismo, a una fracción [de clase]”.²⁰ La evaluación de Errejón y otros observadores implica la suposición de que el MAS hubiese logrado superar esa condición de “Estado aparente” y articular un Estado hegemónico que ahora “conduce”. Esto significaría que el Estado boliviano constituiría una unidad integrada con autonomía relativa, es decir, donde existe un nivel propiamente político separado (en grado variable) de los intereses económicos directos.

ZONA EUREKA KM 3, COBIJA, PANDO,
10 DE SEPTIEMBRE DE 2009

El 10 de septiembre de 2009, es decir, un día antes del primer aniversario de la masacre de Porvenir y unos meses después de la inauguración del primer “Asentamiento Humano”, se desarrolló el Octavo Encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB)²¹ en la sede de la federación campesina de Pando en Cobija. En el orden del día había distintos temas importantes: la cuestión de las elecciones generales a realizarse en diciembre, los planes del gobierno de Evo Morales de construir una represa hidroeléctrica en el río Madera y la organización de los últimos detalles del acto de homenaje en Porvenir al día siguiente. Cuando se llegó

²⁰ *Ibid.*, p. 129.

²¹ El BOCINAB fue fundado en enero de 2003 e integra a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando “Bartolina Sisa” (FDMCP-BS), Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez (FSUTCR-VD), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios (FSUTCR-MD), Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayaramerín (CSUTCG) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO).

a debatir este último punto, una dirigente campesina irrumpió con una noticia desconcertante:²² “Nosotros teníamos elaborado un programa [para el homenaje], pero éste ya fue modificado por la Prefectura. Anoche llegué de La Paz y me encuentro con otro programa, elaborado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Hay palabras del prefecto que no tienen nada que ver.”²³ La noticia causa una indignación generalizada “Hay que averiguar si el ministro llega hoy o mañana, y ver si se puede hablar con él”, propone otra dirigente. “[Quintana] se fue con mentiras, ahora está reunido con el Prefecto. Si quiere coordinar con nosotros, ¡que venga él aquí!”, responde la primera. Un dirigente interviene: “¡El ejecutivo no tiene credibilidad ni respeto, y no tenemos por qué hacer caso a él! [...] Aparte de nosotros nadie más puede manejar otro programa, porque ellos no han vivido lo que nosotros hemos vivido. ¡Debemos hacernos respetar y escuchar!” Una activista da otra noticia que causa el malestar de los presentes: hay una convocatoria del Comité Cívico de hacer una caravana a Porvenir y luego festejar una misa. “¿Con qué moral los del Comité Cívico van a ir allá a realizar una misa?”, pregunta una dirigente, y sugiere pedir medidas de seguridad. La situación parece no tener salida, porque las autoridades no están dispuestas a dialogar. Ante ello, algunos(as) dirigentes recuerdan la importancia de la organización propia, de ser necesario contra el gobierno. Son las organizaciones que integran el BOCINAB las que “deberían

²² Esta y las siguientes citas provienen de la “Memoria del Octavo Encuentro del BOCINAB”. En un gesto de mucha confianza, los activistas del Norte Amazónico me entregaron éste y otros documentos. Dado que el debate, cuya transcripción cito aquí, se desarrolló “fuera de escena”, como un “discurso oculto” de los dominados lejos de los ojos observantes de los poderosos y de investigadores, opté por mantener el anonimato de las y los participantes. Asimismo, señalo que he corregido ligeramente la sintaxis y la ortografía de la minuta.

²³ Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), *Memoria del Octavo Encuentro del BOCINAB*, 10 de septiembre, 2009.

estar armando la agenda para mañana”, concluye una dirigente campesina. “Siempre ha habido que son ellos los que imponen su programa y los actos a realizarse. Los que componen el BOCINAB deben ponerse fuerte. ¡Las organizaciones deben reposicionarse!”

Pero la organización del acto de homenaje no es el único asunto que generó desacuerdo entre las autoridades y las organizaciones campesinas e indígenas, como quedó de manifiesto en el debate sobre las listas de candidatos del MAS para las elecciones en diciembre de 2009 que, en principio, fueron consensuadas al interior de las organizaciones sociales. El tono de la discusión quedó marcado con el primer pronunciamiento de uno de los dirigentes, quien relata el ambiente que reinaba en una reunión con las autoridades unos días antes:

¡Juan Ramón de la Quintana [sic] y el Prefecto no respetan! A cada hora llegaba la lista de los candidatos y no se sabía a cuál de las listas creer. No deben abusar con las organizaciones. [Quintana emitió] una convocatoria [para un encuentro] de 5 a 12 de la noche y jamás puso la cara. Los compañeros del Beni y nosotros nos sentimos molestos por este hecho, no hay respeto, pues el ministro no puso la cara y decidimos irnos. Se elevó un documento de desconocimiento a esta autoridad.

Una dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas lo segunda:

En lo político no se están respetando las decisiones de las organizaciones sociales. En Asamblea se han consensuado los candidatos, y lo mismo hicieron los indígenas. Pero [se impusieron] por encima de las decisiones que han tenido en el cabildo de los indígenas, es una burla, porque no han tomado en cuenta la decisión de la organización, no se ha respetado. [...] A la Federación de Mujeres [tampoco] se la ha tomado en cuenta. [...] Los candidatos que han puesto no son de consenso y ni siquiera los conocemos.

Los campesinos e indígenas se encuentran en una encrucijada: por un lado entienden que no tienen incidencia real sobre los procesos políticos y, por el otro lado, se sienten obligados a demostrar su compromiso con el gobierno, al que a pesar de todo ven como “suyo” y del que temen represalias si no manifiestan su apoyo, como había ocurrido unos meses antes. La decisión de apoyar o no a los candidatos impuestos por el gobierno es tanto más angustiante porque todas y todos los reunidos saben que no apoyarlos implicaría el peligro del retorno de la clase dominante tradicional. Y lastimosamente, las cosas se tornarían aún más complejas cuando una representante del Bloque Oriente interviene en el alboroto general causado por la indignación para observar que las organizaciones no sólo sufren la imposición, sino también la injerencia directa del gobierno:

Ningún sector está de acuerdo con la lista de candidatos y eso debe llevarnos a pensar en la organización. Hay organizaciones que han venido obedeciendo la agenda del gobierno, y nos hemos olvidado de nuestra agenda orgánica [...] El gobierno ha agarrado a las cabezas de las organizaciones para negociar y eso no debió ser. Esta situación ha sido lo típico de todos los gobiernos que siempre han entrado [...] Cuando nosotros volvamos a retomar nuestra fortaleza y unidad vamos a demostrar esto. Nosotros [...] decimos que vamos a tener que volver a votar por los patrones porque están sólo por el instrumento político.

MEMORIA/DESPOJO

El encendido debate de las y los dirigentes campesinos toca, a mi manera de ver, tres grandes campos de problemas que tienen que ver con la realización concreta del proyecto político “nacional” del MAS. El primero de estos campos se refiere a lo que las y los campesinos perciben, a todas luces, como una especie de “despojo de la memoria de su lucha”. Este despojo es a la vez simbólico y

material: el día después de esa reunión, en el acto cuya realización fue monopolizada por las autoridades del MAS, se inauguraría un “Monumento a los Caídos” en el lugar de los hechos. “A la memoria de los mártires por la dignidad nacional”, dice la dedicatoria del monumento, seguido por catorce nombres, y uno de ellos es el del único “autonomista” que murió ese día. Ese relato de la “nación”, como también su construcción material, ofuscan simbólicamente la lucha llevada a cabo por las y los campesinos; lo mismo ocurre con la invitación al Comité Cívico, nada menos que la principal organización de los autores de la matanza, a participar en el acto de homenaje. Ellos, que “no han vivido lo que nosotros hemos vivido”, imponen su lectura (“como siempre ha habido”, como dicen), la de la “dignidad nacional”, que en los hechos integra los núcleos clasistas patrimonialistas y borra, tendencialmente, la memoria de lucha antioligárquica campesina. “Definir un ‘nosotros’ en términos nacionales [...] tiene consecuencias”, señalan Philip Corrigan y Derek Sayer:

Tales clasificaciones son medios para un proyecto de integración social que implica también, inseparablemente, una desintegración activa de otros polos de identidad y otras concepciones de la subjetividad. Proporcionan una base para la construcción y la organización de la memoria colectiva —la escritura de la historia, la fabricación de una “tradicción”— que es, inseparablemente, una organización activa del olvido.²⁴

TIERRA/TERRITORIO

Esa violencia simbólica, que se materializa en monumentos, misas etc., no se limita a despojar a las y los campesinos del derecho de

²⁴ Philip Corrigan y Derek Sayer, “La formación del Estado inglés como revolución cultural”, en *Antropología del Estado: dominación y prácticas contestatarias en América Latina*, La Paz, PNUD, 2007, p. 80.

recordar a sus compañeros muertos en sus propias palabras. El despojo de la memoria de la lucha campesina tiene una dimensión absolutamente terrenal (material), que constituye el fundamento sobre el cual se erige esa violencia simbólica: los conflictos entre el gobierno y campesinos e indígenas sobre el proceso de repartición de la tierra. Y es que la “Revolución Agraria” de Evo Morales fue fuertemente contestada por estos sectores, debido a que en vez de abrogar el llamado “Decreto Barraquero”, lo incorporó a la “Ley de Reconducción Comunitaria” (Ley 3545). Con ello, dotó de títulos a una clase terrateniente que nunca los había tenido, y le garantizó un importante control territorial. “No permitiremos ni reconoceremos el reglamento a la Ley 3545 [...], sin que éste sea antes socializado, consensuado y aprobado por el sector campesino del Departamento de Pando”, manifestaron los campesinos en el año 2007 (de hecho, la Ley 3545 ya estaba en vigencia) en un taller de preparación para una “Mesa de Diálogo” con representantes del gobierno. Y, con un tono que no dejaba lugar a dudas añadieron: “No se permitirá el reconocimiento de las 15 000 hectáreas para el otorgamiento de derechos concesionales maderables y no maderables”, que es la figura legal con que se dotó de tierra a los latifundistas.²⁵

En realidad, lo que hizo el gobierno del MAS fue acelerar el proceso de saneamiento que, gracias exclusivamente a la lucha campesina, estaba en curso desde hace ya seis años, y que no se había concluido debido a la oposición terrateniente dentro y fuera del Estado:

Cuando llegó Evo en 2006, la conquista por la tierra y el territorio ya estaba dada. Las luchas campesinas e indígenas ya lo habían logrado, ya se había hecho el saneamiento de tierra, ya se habían entregado

²⁵ FSUTCP, *Matriz de preparación de la mesa de diálogo, Taller de construcción colectiva de propuestas*, 23 de mayo, 2007.

muchos títulos. Había un proceso de conciencia sobre la tierra y el territorio, pero también una conciencia política.²⁶

Por supuesto que no es cosa menor haber terminado ese proceso, sin embargo, al hacer esto, el gobierno no sólo terminó validando los derechos ilegítimos de los barraqueros sobre el territorio, sino que realizó, sobre todo en los meses posteriores a la masacre de Porvenir, un proceso de distribución masiva de tierras a ese sector. En total, tan sólo en Pando el Estado Plurinacional validó 1.2 millones de hectáreas (en concesión a 40 años) a empresas madereras; en el mismo departamento, entre concesiones y propiedades se ha dotado de casi un millón y medio de hectáreas a los patrones terratenientes, quienes, según varios sindicalistas campesinos, han acaparado las mejores áreas de la selva.²⁷ Irónicamente, la mayor parte de esas dotaciones se dieron después de la masacre, cuando “había un descenso del sector campesino, de su emergencia de masa”, como explica el intelectual y activista amazónico Abraham Cuellar. “¿Eso fue algo que negociaron?”, le pregunté durante nuestra entrevista. “¡No, fue impuesto [...], fue impuesto por encima de las decisiones indígenas-campesinas del Norte Amazónico! No se consultó, no hubo un consenso de la gente para que se aprobara eso, pero se hizo. Y eso es un error”.²⁸

La dotación de tierras sigue siendo uno de los principales temas de conflicto entre el sector indígena-campesino y el gobierno

²⁶ Entrevista a Abraham Cuellar, activista campesino, integrante del Poder Amazónico Social (PASO) y exsenador de Pando, realizada en Cobija, 22 de febrero, 2012.

²⁷ Börries Nehe, *Tierra de nadie, tierra de todos. Estado, espacio y luchas campesinas en el Norte Amazónico de Bolivia* (Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 2015), p. 390. En <https://www.scribd.com/doc/285799475/Tierra-de-nadie-tierra-de-todos-Estado-espacio-y-luchas-campesinas-en-el-Norte-Amazónico-de-Bolivia-PDF> e Instituto Nacional de Reforma Agraria [ed.], *Pando: tierra saneada con la reconducción comunitaria*, La Paz, INRA, 2010.

²⁸ *Loc. cit.*

nacional, en parte porque falta tierra suficiente para nuevas comunidades campesinas, y porque la política de tierras del MAS garantiza, en última instancia, la reproducción de la clase terrateniente y del orden patrimonialista. Ante ello, borrar la memoria de lucha y la línea divisoria entre “nosotros” y “ellos” no es un acto inocente.

INJERENCIA/IMPOSICIÓN

Esto nos lleva al segundo campo de problemas, que tiene que ver con las formas en que el gobierno nacional resuelve este y otros conflictos, y cómo moviliza el “apoyo” a sus políticas. Cuando la dirigente lamenta que “el gobierno ha agarrado a las cabezas de las organizaciones para negociar”, lo que señala es que hay un proceso de cooptación de las dirigencias que ha sido “típico de todos los gobiernos”. Ésta es la causa principal del debilitamiento de las organizaciones y del quiebre entre las cúpulas dirigentes y las bases, ambas tendencias se irían agravando en los meses siguientes. En esta relación, uno de los momentos claves se había dado apenas un mes antes de la reunión del BOCINAB, cuando el Congreso Orgánico de la FSUTCP fue “intervenido” por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz. La razón para la intervención fue el rechazo campesino a los planes del gobierno de construir una represa hidroeléctrica en el río Madera, y su oposición al programa de colonización.

En julio de 2009, el BOCINAB había publicado un comunicado titulado “Rechazamos el Plan Gubernamental de Asentamiento Humano así como Actividad Petrolera que Atentan la Vida e Integridad de la Amazonía”, con esta demanda calificaron los NAH como un “abierto y franco atentado sobre la vida e integridad de la Amazonía en general”, y lamentaron que:

igual que anteriores gobiernos neoliberales, de forma oculta e incon-sulta, arbitraria y unilateral el gobierno nacional pretende ejecutar el plan de asentamiento sobre la Amazonia. [...] Se percibe claramente que [el gobierno] no busca una solución integral a los problemas de la Amazonía en general ni de las comunidades campesinas e indígenas ni de los territorios indígenas.²⁹

El rechazo de las organizaciones indígenas y campesinas se debió, fundamentalmente, a dos puntos: en primer lugar, la orientación “productivista-desarrollista” de los NAH, de la cual se esperaba que transformara la “zona límite” de la Amazonía en un “polo de desarrollo”. Esto constituye una profunda contradicción con la orientación agroextractivista de campesinos e indígenas amazónicos, con todo el sentido que ellas y ellos han producido sobre su manera de relacionarse con el territorio amazónico, y con el discurso con el que se oponen a la destrucción de la selva por empresas y terratenientes. En segundo lugar, los sindicatos pedían titular primero a sus propios afiliados, y sólo después a los campesinos provenientes del Trópico de Cochabamba. En el fondo, la querrela no es únicamente sobre las capacidades de decisión sobre el reparto de la tierra (la ley INRA estipula que las federaciones campesinas departamentales tienen derecho a veto en ello), sino fundamentalmente a la política de la “importación” de cientos o miles de afiliados de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba (cuyo presidente sigue siendo Evo Morales) que pone al gobierno nacional en una posición de poder prescindir de la integración de los sectores campesinos e indígenas locales. En vez de articular los sectores subalternos locales al proyecto “nacional” representado por el MAS, la región es conquistada vía

²⁹ BOCINAB, Resolución no. 001/2009 - rechazamos plan gubernamental de asentamiento humano así como actividad petrolera que atentan a la vida e integridad de la Amazonia, bocinab, 11 de julio, 2009. En www.bicusa.org/en/Document.102258.aspx.

un traslado geográfico del núcleo duro de la base electoral del partido gobernante.

Con su visita al Congreso de la Federación Campesina de Pando, los dos, ministro y viceministro lograron que la dirigencia campesina firmase un “acuerdo” con el gobierno, en contra de la voluntad explícita de sus bases. La descripción de este hecho se lee así:

El Congreso orgánico convocado por la Federación tenía como un único punto a tratar la modificación de su estatuto orgánico para incorporar la temática de recursos naturales; sin embargo, pese a que se había organizado el trabajo por comisiones, la visita no prevista del Ministro Quintana y el Viceministro Almaraz con el objeto de presentar nuevamente el plan de asentamientos humanos y lograr acuerdos, generó la molestia de muchos secretarios de las subcentrales y comunidades que incluso abandonaron la reunión.³⁰

El mismo documento señala también que “dadas estas circunstancias, el respaldo a la medida gubernamental por parte de dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación de Campesinos fue evidente”. En breve, el gobierno había logrado cooptar la dirigencia sindical que dio luz verde a los NAH, subordinándola al núcleo gobernante y alejándola de sus bases. En este sentido, el legado más importante de la política del MAS a partir del año 2008 parece ser “el debilitamiento de las organizaciones campesinas departamentales debido a las agendas políticas nacionales y regionales, así como por los procesos electorales y los asentamientos humanos”, como lo resume el CIPCA en su informe sobre el año 2009: “Adicionalmente a su debilitamiento ocasionado por la Masacre de Porvenir, han sufrido una fuerte injerencia política

³⁰ Pamela Cartagena y Massiel Saavedra, “Asentamientos humanos en Pando: explorando mejores condiciones de vida”, en *Mundos Rurales*, núm. 2, enero de 2010, p. 17.

en su vida orgánica. Esto ha debilitado sus relaciones con las organizaciones intermedias y comunales [...]”³¹

Para decirlo en pocas palabras, electoralmente hablando, el programa de los NAH dotó al MAS de una “autonomía relativa” del campesinado amazónico. Esta autonomía le permitió imponer a sus propios candidatos en contra de la voluntad de campesinos e indígenas, y negociar las cuotas de poder con la vieja élite patrimonialista, a la cual pudo ofrecer un *pool* de votos incondicionales. La manera en que se impusieron este y otros proyectos tuvo además el efecto nada secundario de debilitar fuertemente a las organizaciones campesinas. Esto, por supuesto, constituye un momento central en la cancelación de la clase campesina como sujeto político, lo que a mediano plazo preparó el terreno para las imposiciones múltiples desde el poder central del Estado y para la penetración de la Amazonía por el capital. En este sentido, se puede afirmar sin peligro a equivocarse que los NAH en Pando establecieron un precedente de los desarrollos posteriores en el TIPNIS. Por cierto, la historia termina como habían previsto los campesinos: la tierra no dio para la producción; los apoyos estatales terminaron después de las elecciones de 2010; algunos colonizadores talaron las maderas preciosas, y todos regresaron a casa. Mientras tanto el BOCINAB, como instancia central de la coordinación campesina-indígena, ha sido tan debilitado que dejó de funcionar por completo.

DESPLAZAMIENTO/RETORNO

El tercer campo de problemas debatidos en la reunión del BOCINAB, en septiembre de 2009, tiene que ver con lo que una dirigente campesina resume señalando que “vamos a tener que vol-

³¹ Centro de Investigación y Promoción al Campesinado, *Memoria - Informe de la Gestión 2009*, La Paz, CIPCA, 2010, p. 93.

ver a votar por los patrones porque están sólo por el instrumento político”. Se trata, pues, de la continuación de la vieja élite con otros medios, es decir, no de una élite transformada, sino de la misma élite, que utiliza los mismos mecanismos de dominación y explotación, pero cuya relación con el Estado boliviano pasa por algunos nuevos canales, como el MAS (el “instrumento político”). Este desplazamiento político del sector campesino e indígena ya fue claramente visible en 2009, pero se ha ido agravando fuertemente desde entonces. Tres años después, entrevisté a Doris Domínguez, dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando “Bartolina Sisa” durante los años de mayor enfrentamiento. “Hemos sacado de la dependencia del Estado a las organizaciones en nuestra gestión”, contó ella:

[pero] después de haber sacado de donde estábamos, oprimidos, esclavos, [después de] haber logrado esa libertad para nosotros, para las organizaciones, llegamos a la lucha del 11 de septiembre, caminamos unos meses más, y se aprovechan ya, se hacen dueños de esa lucha del sector campesino las autoridades. Es donde toman ellos la dirección, todo lo que se llama ‘toma de decisiones’. Las autoridades la toman, y es donde el dirigente campesino no tiene esa fuerza para decir: ‘¡No, somos nosotros los que tenemos que llevar adelante este proceso de cambio que tanto ha costado!’ [...] Lo único que falta es que llegue a gobernar nuevamente el que está preso, que es Leopoldo Fernández [...]. Las mismas autoridades que estaban gobernando más antes son ellas las mismas que vuelven a gobernar.³²

Es decir, en el momento de la mayor fragilidad de la clase campesina amazónica, después de haber resistido años de extrema violencia por parte de los grupos tradicionales de poder, el núcleo gobernante en el Estado central tuvo *momentum* y lo supo apro-

³² Entrevista a Doris Domínguez, dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando “Bartolina Sisa”, Cobija, 23 de febrero, 2012.

vechar: las y los campesinos carecían en buena medida de capacidades de hacer valer sus intereses y de defender su organización, lo que puso a los operadores del MAS en condiciones de cooptar las dirigencias y “hacerse dueño de la lucha”.

Al mismo tiempo, después de haber detenido a Leopoldo Fernández, el juicio por la matanza pendía como la espada de Damocles sobre los integrantes de la élite local. Y ahí ha seguido pendiendo desde entonces: ni una sola persona ha sido condenada por el asesinato de decenas de campesinos, ni siquiera Leopoldo Fernández, quien fue identificado sin lugar a dudas como autor intelectual de la masacre, y que hoy día vive bajo arresto domiciliario en una amplia casa en la Zona Sur de la ciudad de La Paz (sin que se haya concluido el juicio). La amenaza del juicio, la militarización del departamento de Pando y la imposición del gobernador interino pusieron al gobierno de Evo Morales en una posición muy favorable para negociar con la clase dominante en la región: tal como había ocurrido en el nivel nacional con la negociación de la NCPE entre los funcionarios gubernamentales y los representantes de la oligarquía, también en Pando se establecieron las cuotas de poder, prescindiendo, en perfecta concordancia, de tener en consideración al sector campesino-indígena.

En cuanto a ello, la renegociación de la relación entre Estado central y Estado departamental tiene dos momentos: en las elecciones de 2009 destacó la cancelación de todas las candidaturas campesinas y la imposición de candidatos que gozaban de la confianza de los operadores políticos del gobierno central, fue el momento propio de la imposición desde el Estado central y la cúpula del MAS. Desde entonces, y cada vez más abiertamente, el MAS ha generado espacios para personas pertenecientes a la estructura patrimonialista tradicional en Pando, que se volvieron a apoderar definitivamente de los aparatos estatales departamentales a partir del año 2010, bajo el cobijo del MAS, entiéndase. “El MAS ha cruzado ríos de sangre con la derecha aquí en Pando”, me co-

mentó un funcionario departamental que prefirió no revelar su nombre. “Donde los que masacraron en Porvenir, hoy día están trabajando en la Gobernación. El ministro de la presidencia ha hecho un pacto con mucha de esa gente. No está siendo enjuiciada, no está siendo procesada. Los están perdonando, gente que ha asesinado”.³³

Esto implicó no sólo un rápido alejamiento del MAS de la base campesina, sino también de los integrantes históricos del MAS en la región, que, con el beneplácito del partido nacional, fueron sustituidos.³⁴ El sociólogo Wilder Molina constata que lo mismo está pasando en el Beni y habla del reemplazo de liderazgos y militantes orgánicos por “adhesiones subvencionadas”: “Es increíble, y eso está patrocinado por la gente del gobierno. [...] Se ha reproducido por otra vía la misma estructura de gestión, los mismos grupos están en el poder, no ha cambiado nada. Y eso lo está fomentando el gobierno del Estado actual”.³⁵ La “subvención” consiste, pues, en ofrecer a los grupos tradicionales de poder el control sobre los aparatos estatales y el manejo del presupuesto del Estado departamental (y municipal), exactamente eso es lo que históricamente ha permitido su reproducción como *élite patrimonialista*, es decir, como élite no moderna que vive parasitariamente del presupuesto estatal, el cual distribuye de manera clientelar para garantizar su perpetuación como clase. Y esa es, también, la existencia histórica del Estado aparente en Bolivia.

Se trata, entonces, del retorno de la élite en sus propios términos y del despojo político de los sectores subalternos, en el sentido de que se los despoja activamente de las capacidades de decidir sobre sí mismos y sobre su territorio; capacidades que habían

³³ Entrevista a funcionario departamental, 24 de febrero, 2012.

³⁴ Ante la resistencia de los antiguos militantes, el MAS de Pando se dividió; la cúpula nacional dio reconocimiento al ala de los nuevos miembros de la vieja élite.

³⁵ Entrevista a Wilder Molina, sociólogo y abogado, realizada en Trinidad, Beni, 3 de junio, 2012.

construido en los años anteriores de lucha. A la organización activa del olvido corresponde la exclusión activa de la política. El dolor y la rabia que causa ese desplazamiento se reflejan en las palabras de Luis Mayo, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Pando, cuando habla de las autoridades del MAS que controlan el departamento:

Es gente que ha sido de derecha, es gente que ha ocupado grandes cargos en la gobernación, es gente que ha estado en contra del proceso, es gente que ha estado masacrando a campesinos el 11 [de septiembre] [...]. No podemos, que esta gente está en mando, no podemos. ¡Si era para que esta gente se fuera [...], y hoy se infiltran allí, [...]! No podemos, nosotros como campesinos no podemos estar. No podemos, porque nos han masacrado, porque han quemado instituciones, porque han apaleado a hermanos campesinos, han matado. Quieren que dejemos el cambio para ellos. ¡No era para ellos el cambio, era para nosotros, para la gente más vulnerable!³⁶

El hecho que Doris Domínguez y Luis Mayo, ambos sobrevivientes de la masacre, usen el vocabulario del discurso oficial (“el cambio”) para referirse a las esperanzas de transformación política y social del sector campesino amazónico es, creo yo, una manera de adoptar una distancia crítica y exigir al “gobierno de los movimientos sociales” que cumpla con lo que su autodenominación promete. Pero hay, también, una amarga ironía en las palabras de los dirigentes, por un lado, porque si el cambio es “para ellos”, simplemente no hay cambio. Y, por el otro lado, porque el revés que la lucha campesina en la Amazonía sufrió después del 11 de septiembre de 2008 no sólo se debe a la masacre, sino sobre todo a la política adoptada por el gobierno central. Es decir, la implementación del “cambio” tal y como lo entiende el gobierno

³⁶ Entrevista a Luis Mayo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Pando, efectuada en Cobija, 20 de agosto, 2010.

del MAS es la causa más importante del aborto del “cambio” tal y como lo entienden los campesinos amazónicos.

¿ESTADO? ¿HEGEMONÍA? ¿(PLURI-)NACIÓN?

El papel histórico del MAS en la región amazónica parece ser, desde luego, la unificación instrumental de aquella parte de la vieja élite lo suficientemente “moderna” como para entender que su inserción pragmática en un partido que lleva el socialismo en su sigla implica que su presencia en el Estado central es mediada por las estructuras partidistas, pero que en el nivel regional (departamental, local) es la misma élite la que puede dar forma y contenido al “proceso de cambio”. El MAS garantiza una participación en el ejercicio del poder en el Estado central, aunque para las élites patrimonialistas esta participación ha disminuido crecientemente desde el año 2000; aquí, el núcleo íntimo del gobierno, la nueva burocracia estatal y las nuevas élites sindicales, junto con sectores emergentes principalmente del mundo andino, ejercen un control considerable sobre los aparatos, lo que de ninguna manera excluye las posibilidades de negociación, como quedó ampliamente comprobado desde la reescritura de la NCPE. En el nivel regional, el atractivo del MAS para los sectores dominantes proviene de su doble función al estar “en el Estado” y “en la sociedad”: “en el Estado” garantiza la reproducción del modo histórico de las élites de insertarse en el Estado y reproducirse como clase (incluyendo el ejercicio de la dominación) a través del acceso al presupuesto departamental y municipal y su distribución clientelar. “En la sociedad”, el MAS cumple el papel de debilitar las posibilidades de organización autónoma de campesinos e indígenas en la región a través de la cooptación de sus dirigencias y otros mecanismos de fragmentación. De esta manera, el MAS promete la “integración” de los dominados al nuevo viejo orden político, una “inte-

gración” que, insisto, no tiene nada de articulación hegemónica, sino que se trata de la incorporación instrumental y clientelar de las cúpulas de las organizaciones otrora independientes.

Desde luego que el discurso gubernamental de “sentar soberanía” y “consolidar lo nacional-boliviano” no corresponde a un proceso real de “construcción de Estado”, ni en su acepción “nacional”, ni mucho menos “plurinacional”. No hay construcción de un proyecto de Estado hegemónico (nacional o plurinacional) con base en una estrategia de acumulación y una articulación política rigurosa de los sectores populares. Lo que hay, por el contrario, es una superposición contradictoria entre, por un lado, un modelo de acumulación defendido por el núcleo gobernante en el Estado central que se basa fundamentalmente en la extracción y exportación de hidrocarburos y que se implementa en un nivel “nacional”, con fuerte participación de las élites locales en las ganancias a través del reparto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); y, por el otro lado, la reproducción de formas históricas de acumulación de las élites terratenientes locales, insertadas en el espacio global del capital vía la economía de la soya, de la castaña, de la madera, etc. Mientras que la resistencia de campesinos e indígenas contra los proyectos de “desarrollo” del gobierno y contra la embestida de empresas y patrones ha sido un permanente dolor de cabeza para los gobernantes, no parece existir ninguna incompatibilidad entre las estrategias de acumulación de las élites locales y el modelo gubernamental desarrollista y neoextractivista. Al contrario: la economía en la Amazonía, resume Wilder Molina,

[...] sigue siendo una economía extractivista altamente depredadora, basada en una explotación radical de los recursos y de la mano de obra [...]. El modelo de desarrollo no ha cambiado. Y varias de las cosas que el gobierno promueve como idea de desarrollo están en el mismo sentido de ese modelo tradicional. Copar las tierras para

el uso agropecuario, esa es la idea del Estado: de que hay que copar las tierras amazónicas, [...] hacer agricultura a gran escala, mecanizar el agro, hacer agroindustria con la idea del modelo cruceño.³⁷

La superposición entre esas estrategias de acumulación se reproduce también políticamente, en la medida en que el Estado boliviano se acopla a los espacios patrimonialistas. No hay, pues, ni siquiera una unificación económica y políticamente dominante de ese bloque, y esto implica que tampoco hay una construcción de un Estado como una unidad integrada con autonomía relativa, ésta sigue, por el contrario, en su condición histórica abigarrada. Huáscar Salazar resume esto con la expresión afortunada de que no hay “ni siquiera un proyecto nacional-popular”:

lo grotesco de este patrón de acumulación parte de que éste es definido por las instancias gubernamentales como un proyecto comunitario sostenido en las bases de un modelo desarrollista nacional-popular, pero que en realidad se inscribe en el capital global de una manera en que ni el propio neoliberalismo logró consolidar y que muy poco tiene de “nacional”.³⁸

Los conflictos entre las organizaciones sociales y el gobierno en los últimos años demostraron la incompatibilidad de esa estrategia de acumulación con un eventual proyecto social y de Estado que articulase los sectores indígenas, campesinos y populares “nacionales”, incluyendo la región amazónica. Aquí, los campesinos e indígenas han podido inscribirse en el Estado y en el cuerpo político “nacional” en la medida en que ellas y ellos han luchado

³⁷ Entrevista a Wilder Molina Argadona, sociólogo y abogado, realizada en Trinidad, Beni, 2012.

³⁸ Huáscar Salazar, “Se han adueñado del proceso de lucha”, en *Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Facultad de Economía/Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, 2015, p. 262.

por su autonomía y por el quiebre de las relaciones históricas de dominación. En el momento en que dejaron de hacerlo porque “no podían dar más”, como dice Luis Mayo, en ese momento se vuelve a imponer la heteronomía del “Estado” y del “capital”, es decir, del mando político en el Estado central acoplado con la dominación patrimonialista, sustentados ambos por su inserción en las dinámicas del capitalismo global cuya reproducción ampliada buscan garantizar.

En este sentido, el hecho de que el gobierno de Evo Morales produce las condiciones para que los grupos dominantes patrimonialistas puedan reproducirse en y a través del Estado y de su acceso a los recursos es también una manera de controlar políticamente a la clase campesina a través de los mecanismos históricos de la dominación en la región. Su anulación como sujetos políticos en el Estado y el acoplamiento de éste con los modos patrimonialistas de la dominación son, *sensu stricto*, momentos en la producción de las condiciones para la valoración del capital. Esto quiere decir que no hay Estado hegemónico en Bolivia, sino la perpetuación del Estado aparente. Y por lo mismo, no hay “pueblo”, sino una formación social abigarrada.